



ACUERDO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA NECESIDAD DEL DICTADO DE MEDIDAS CAUTELARES FORMULADA POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL, POR LA POSIBLE VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD EN LA INTEGRACIÓN O CONFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES QUE PARTICIPARÁN DE CARA A LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2023-2024, DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR UT/SCG/Q/AFCC/JD35/MEX/98/2023

Ciudad de México, a veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES

I. El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el Acuerdo INE/CG33/2019, mediante el cual se aprobó la implementación, de manera excepcional, de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos nacionales.

II. En sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto de veinte de julio de dos mil veintitrés, se emitió el Acuerdo INE/CG441/2023, por el que se aprobó el Calendario y Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2023-2024 a propuesta de la Junta General Ejecutiva, así como el Acuerdo INE/CG446/2023, por el que se aprobó el Plan Integral y los Calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes con el federal 2023-2024.

III. El veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, el Consejo General de este Instituto emitió el Acuerdo INE/CG492/2023, por el que se aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024 y sus respectivos anexos. Una de las líneas estratégicas de dicho documento, fue el establecer el procedimiento para el reclutamiento, selección y contratación de las figuras de Supervisor Electoral y Capacitador Asistente Electoral.

IV. Respecto a dichas figuras a contratar, el citado acuerdo del Consejo General consideró que en observancia del artículo 303, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los Consejos Distritales, con la vigilancia de las representaciones de los partidos políticos, designarán en enero del año de la elección, a un número suficiente de personas que se desempeñarán como Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as Asistentes Electorales, de conformidad con la convocatoria pública expedida, para realizar las actividades establecidas en el párrafo 2 del citado artículo, en auxilio a las Juntas Distritales



Ejecutivas y los Consejos Distritales, antes, durante y después de la Jornada Electoral, que cumplan los requisitos de su párrafo 3.

V. El seis de octubre de dos mil veintitrés, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral emitió el Acuerdo INE/CCOE/003/2023 mediante el cual se aprobó la Adenda para incorporar criterio que atiende el principio de Imparcialidad en el Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales que forma parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024 y sus respectivos anexos, que será aplicable al Proceso Electoral 2023-2024 y, en su caso, a los extraordinarios que deriven de éste.

VI. El diez de octubre de dos mil veintitrés, los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y MORENA, presentaron dos demandas de recurso de apelación en contra del Acuerdo citado en el antecedente previo.

VII. El ocho de noviembre de dos mil veintitrés, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió los recursos de apelación SUP-RAP-315/2023 y SUP-RAP-316/2023 ACUMULADO, mediante los cuales se revocó el Acuerdo INE/CCOE/003/2023 de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral.

VIII. El veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, el Consejo General aprobó el *ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA ADENDA PARA INCORPORAR CRITERIO QUE ATIENDE EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS Y LOS SUPERVISORES ELECTORALES Y CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES QUE FORMA PARTE DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2023-2024 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE SERÁ APLICABLE AL PROCESO ELECTORAL 2023-2024 Y, EN SU CASO, A LOS EXTRAORDINARIOS QUE DERIVEN DE ÉSTE.*

IX. Entre otras cuestiones, la citada ADENDA estableció que en términos de lo previsto en el Procedimiento para la Compulsa de la Clave de Elector -Anexo 5 del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales vigente,¹ una vez que la Junta Distrital Ejecutiva ha notificado a las personas aspirantes a dichos cargos que aparecieron en la base del padrón de afiliadas/os o militantes, de algún partido

¹ Aprobado mediante acuerdo INE/CG492/2023, por el que se aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024 y sus respectivos anexos.



político, si la persona aspirante presenta ante la Junta Distrital Ejecutiva el oficio de desconocimiento de afiliación, así como la solicitud de baja de datos personales de los padrones de militantes en el plazo de tres días hábiles posteriores a la notificación, **podrá continuar con el procedimiento de reclutamiento y selección**. De presentarse este supuesto, se procederá de la siguiente manera:

- 1) La Junta Distrital Ejecutiva notificará a la persona aspirante que se **iniciará un procedimiento sancionador ordinario oficioso, para determinar la legalidad o ilegalidad de la afiliación**; asimismo, **la apercibirá de que en caso de que se demuestre su afiliación voluntaria, se le dará de baja del procedimiento de selección o, en su caso, se rescindirá su contrato y se iniciará procedimiento administrativo sancionador en su contra**.
- 2) La Junta Distrital Ejecutiva, dará vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para que realice la investigación y recabe los elementos necesarios para iniciar un procedimiento sancionador ordinario oficioso, a fin de determinar la legalidad o ilegalidad de la afiliación.
- 3) Una vez realizada la investigación correspondiente, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, entre otras cuestiones, determinará si procede proponer medidas cautelares a la Comisión de Quejas y Denuncias.

**Procedimiento ordinario sancionador
UT/SCG/Q/AFCC/JD35/MEX/98/2023**

X. El veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, se dio inicio al procedimiento ordinario sancionador citado al rubro, con motivo de **ocho** escritos de queja y anexos que acompañan a cada uno de ellos presentado, signados por las personas enlistadas en la siguiente tabla, quienes aspiraban al cargo de Supervisor/a y/o Capacitador/a Asistente Electoral dentro del Proceso Electoral Federal 2023-2024, a través de los cuales, hicieron del conocimiento de esta autoridad electoral, posibles indicios de que el Partido Revolucionario Institucional los afilió sin su consentimiento y, para ello, utilizó indebidamente sus datos personales:

No.	Persona denunciante
1	Alexia Fernanda Cortez Carrillo
2	Manuel de Jesús Borjon Rico
3	Lilia Belén Ortega Quiroz
4	Blanca Delia Ruiz Uriarte
5	Alexander Iribe Soto
6	Judith Esmeralda Ávila Herrera
7	Luz María Rivera Lajja
8	Enrique Alberto Alvarado Hernández



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**ACUERDO ACQyD-INE-346/2023
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/AFCC/JD35/MEX/98/2023**

A partir de lo anterior, como parte de la investigación implementada, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, registró el expediente respectivo y, entre otras cuestiones, ordenó una búsqueda en el Sistema de Afiliados que administra la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, con el objetivo de conocer el estatus que guarda la afiliación de las **personas involucradas**, al Partido Revolucionario Institucional.

Además, se solicitó información al partido político señalado como responsable, en los términos siguientes:

- a) Si actualmente dentro de su Padrón de Afiliados se encontraban registradas las personas antes mencionadas.
- b) Informara la fecha de alta en el referido padrón y remitiera **el original** de los expedientes en que obraran las constancias de las afiliaciones correspondientes.
- c) De ser negativa su respuesta, indicara si anteriormente las personas aludidas fueron afiliadas y la fecha de su baja en el referido padrón, debiendo remitir el original de los expedientes en que obren las constancias del procedimiento de **afiliación y desafiliación** correspondiente.

Finalmente, se instruyó al partido político que, a partir del desconocimiento realizado por las personas aspirantes, procediera de inmediato a darlas de baja de su padrón de militantes.

En respuesta a lo anterior, el Partido Revolucionario Institucional proporcionó datos sobre la afiliación de las personas involucradas y la cancelación del registro de estas como militantes; no obstante, no adjuntó originales de las constancias de afiliación correspondiente, o aquella documentación que demostrara la voluntad de éstas para ser incorporadas como afiliadas de ese instituto político.

XI. El once de diciembre de dos mil veintitrés, se ordenó emplazar al Partido Revolucionario Institucional, como sujeto denunciado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara pertinentes, en relación a la posible transgresión al derecho político de libre afiliación en su modalidad positiva —indebida afiliación— en agravio de las **ocho** personas referidas con antelación.

En respuesta, el veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, estando dentro del plazo legal establecido en el artículo 467, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dio respuesta al emplazamiento que le



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO ACQyD-INE-346/2023
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/AFCC/JD35/MEX/98/2023

fue formulado por la autoridad instructora, realizando las manifestaciones que a su derecho convino.

Asimismo, aportó los originales de **seis** formatos de afiliación, a partir de los cuales, según su dicho, se demostraba el consentimiento de **igual número personas** de querer ser afiliadas a ese ente político.

Finalmente, cabe destacar que, dicho ente político involucrado no exhibió documentación alguna relacionada con Manuel de Jesús Borjon Rico y Lilia Belén Ortega Quiroz; por tanto, dichas personas no serán parte del pronunciamiento que se emite en este acuerdo.

Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 467, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la etapa procesal para ofrecer todos y cada uno de los elementos de convicción que tuviese a su alcance, es precisamente, al momento de dar respuesta al emplazamiento de ley; lo que en la especie no aconteció, respecto de las dos personas arriba indicadas; por lo que su derecho para tal efecto ha precluido.

En este sentido, a partir de la información con que se cuenta, se acordó remitir la propuesta de medidas cautelares a esta Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, respecto de los hechos puestos en conocimiento en el presente procedimiento ordinario sancionador, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo conducente; lo anterior, en congruencia con el procedimiento oficioso aprobado por el Consejo General a que se ha hecho referencia apartados arriba, así como por existir evidencia, al menos de manera preliminar, que podría apuntar hacia una posible afiliación amparada con un consentimiento previo por parte de quienes hoy aspiran a ocupar cargos electorales en el marco de la estrategia de capacitación electoral aprobada para el proceso electoral 2023-2024, por parte del Consejo General de este organismo electoral nacional.

En efecto, tal y como se ha mencionado anteriormente, el presente procedimiento tuvo su origen en las quejas promovidas por las y los ciudadanos previamente citados, quienes se encuentran participando en el proceso de reclutamiento, selección y contratación de supervisores/as electorales y/o capacitadores/as asistentes electorales, al haberse enterado, según su dicho, de estar afiliados al Partido Revolucionario Institucional sin su consentimiento.

En este sentido, el tratamiento que debe darse a este asunto, aún y cuando **no deriva** de un procedimiento oficioso establecido en la Adenda aprobada por el Consejo General de este Instituto, por no tener su origen en un oficio de



desconocimiento de afiliación, sí guarda total similitud con éstos, habida cuenta que son ciudadanos/as que presentaron una queja formal en contra del indicado partido político, por desconocer las razones de su incorporación al padrón de militantes de ese instituto político, lo que a la postre, permitiría seguir participando en el citado proceso de selección y contratación de supervisores/as y/o capacitadores/as asistentes electorales.

Así pues, atendiendo a las razones que fundaron la aprobación de la referida Adenda, este Instituto Nacional Electoral debe garantizar que el procedimiento de selección y contratación de este tipo de funcionariado electoral, esté sujeto a los principios de imparcialidad e independencia, rectores de la función electoral, y sobre todo, que los mismos principios sean observados por quienes fungirán y serán contratados para desempeñar los indicados cargos electorales.

A partir de lo anterior, la propuesta de adopción de medidas cautelares en el presente asunto, tiene su origen en que si bien en un principio existió una manifestación formal por parte de las **seis** personas a que se refiere este acuerdo, de desconocer las razones por las cuales fueron inscritos sin su aparente consentimiento a un padrón de militantes de un partido político, lo cierto es que como se indicó párrafos arriba, el partido denunciado, como parte de las indagatorias realizadas en el procedimiento ordinario sancionador citado al rubro, aportó elementos de prueba para desvirtuar las afirmaciones de las partes quejasas, esto es, que su afiliación sí estuvo precedida de un consentimiento previo e incluso, existe documentación que, en un análisis preliminar y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, podría acreditar su afiliación con ese Instituto político, lo que a la postre y para los fines del proceso de contratación de personas servidoras electorales, podría contravenir los principios que deben ser observados en la función electoral.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral tiene competencia para resolver acerca de la adopción de medidas cautelares, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base III, apartado D), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 459, párrafo 1, inciso b); 468, párrafo 4; 471, párrafo 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 4, párrafo 2; 5, párrafos 1, fracción II, y 2, fracción I, inciso c); 38, párrafo 1, fracción I; y 40, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

En el caso, se actualiza la competencia de este órgano colegiado porque los hechos que por lo que se realiza el presente pronunciamiento consisten, esencialmente, en



la posible contravención a los principios de imparcialidad e independencia que debe ser observada en la integración de los órganos electorales constitucional y legalmente constituidos para la debida prosecución de los procesos electorales federal y locales 2023-2024. Lo anterior, habida cuenta que las figuras de Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as Asistentes Electorales, se erigen como piezas fundamentales en la organización de los procesos electorales, pues son el vínculo entre la ciudadanía sorteada y el Instituto Nacional Electoral, además de que sus actividades son necesarias para el desarrollo de la elección, pues de esta forma se garantiza el ejercicio del derecho al sufragio del electorado y la autenticidad de los resultados.

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS Y MEDIOS DE PRUEBA

Como se adelantó apartados arriba, **seis personas**, quienes aspiraban al cargo de Supervisores/as y/o Capacitadores/as Asistentes Electorales dentro del Proceso Electoral Federal 2023-2024, hicieron del conocimiento de esta autoridad electoral, posibles indicios de que el Partido Revolucionario Institucional los afilió sin su consentimiento y, para ello, utilizó indebidamente sus datos personales.

En este tenor, en el Procedimiento para la Compulsa de la Clave de Elector -Anexo 5 del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los Supervisores Electorales y las y los Capacitadores Asistentes Electorales, vigente, previsto en el acuerdo INE/CG492/2023, por el que se aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024 y sus respectivos anexos, así como en el ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA ADENDA PARA INCORPORAR CRITERIO QUE ATIENDE EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS Y LOS SUPERVISORES ELECTORALES Y CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES QUE FORMA PARTE DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2023-2024 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE SERÁ APLICABLE AL PROCESO ELECTORAL 2023-2024 Y, EN SU CASO, A LOS EXTRAORDINARIOS QUE DERIVEN DE ÉSTE, se estableció como requisito legal para ocupar alguno de estos cargos, el no militar en ningún partido político, ni haber participado activamente en alguna campaña electoral,² en el último año previo a la difusión de la convocatoria, el cual sustenta la temporalidad en la resolución SUP-

² Artículo 303, numeral 3, inciso g) de la LGIPE. La Sala Superior del TEPJF interpretó, por medio del expediente SUP-RAP-373/2018 y ACUMULADOS, con fecha del 24 de octubre de 2018, que la temporalidad de separación de militancia partidista que debe exigirse a la ciudadanía que busque fungir como SE o CAE no podría ser de tres años, sino que ésta sería de un año contado a partir de la difusión de la convocatoria correspondiente.



RAP-373/2018 y acumulados,³ emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No obstante, en la citada Adenda se determinó que con el objetivo de garantizar los principios de imparcialidad e independencia rectores de la función electoral, que deben ser observados en las actividades de las y los Supervisores Electorales y las y los Capacitadores Asistentes Electorales, estableció un criterio orientado a dar prioridad a aquellas personas aspirantes que no militan o se encuentran afiliadas a los partidos políticos, lo anterior, con el fin de atender los citados principios en la integración de Mesas Directivas de Casilla, teniendo como premisa la intervención durante las etapas de reclutamiento y selección, sin afectar su derecho a participar en el proceso.

Con este fin, y atendiendo a lo previsto en el Procedimiento para la Compulsa de la Clave de Elector, una vez que la Junta Distrital Ejecutiva ha notificado a las personas aspirantes que aparecieron en la base del padrón de afiliadas/os o militantes, si la persona aspirante presenta ante el citado órgano subdelegacional de este Instituto el oficio de desconocimiento de afiliación, así como la solicitud de baja de datos personales de los padrones de militantes en el plazo de tres días hábiles posteriores a la notificación, podrá continuar con el procedimiento de reclutamiento y selección.

A partir de ello, la Junta Distrital Ejecutiva notificará a la persona aspirante que se iniciará un procedimiento sancionador ordinario oficioso, para determinar la legalidad o ilegalidad de la afiliación; asimismo, la apercibirá que, en caso de que se demuestre su afiliación voluntaria, se le dará de baja del procedimiento de selección o, en su caso, se rescindirá su contrato y se iniciará procedimiento administrativo sancionador en su contra.

Posterior a ello, la Junta Distrital Ejecutiva dará vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que realice la investigación y recabe los elementos necesarios para iniciar un procedimiento sancionador ordinario oficioso, a fin de determinar la legalidad o ilegalidad de la afiliación. Finalmente, se determinó que una vez realizada la investigación correspondiente, la Unidad Técnica determinará si procede proponer medidas cautelares a la Comisión de Quejas y Denuncias.

En este sentido, tal y como se refirió en el apartado de antecedentes del presente Acuerdo, a partir de los escritos de queja de las personas aspirantes y que forma parte de la investigación implementada en el expediente UT/SCG/Q/AFCC/JD35/MEX/98/2023 del índice de la Unidad Técnica de lo

³ A juicio de esta Sala Superior, la temporalidad de separación de militancia partidista que debe exigirse a la ciudadanía que busque fungir como supervisora o capacitadora asistente-electoral es de un año contado a partir de la difusión de la convocatoria correspondiente.



Contencioso Electoral, se tienen elementos de prueba que, en un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, podrían atentar contra los principios que rigen la función electoral a cargo de esta autoridad y todas y todos sus integrantes, cometidos por parte de quienes hoy aspiran al cargo de supervisor/a electoral o Capacitadora Asistente Electoral; de ahí que la Unidad Instructora, someta a la consideración de esta Comisión de Quejas y Denuncias, la adopción de medidas cautelares.

MEDIOS DE PRUEBA

1. Documentales públicas, consistentes en las impresiones obtenidas en el Sistema de Afiliados que administra la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, con el objetivo de conocer el estatus que guardan las afiliaciones materia de denuncia.

2. Documental Privada, consistente en el oficio PRI/REP-INE/398/2023, firmado por el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, por el que, si bien es cierto proporcionó información sobre la cancelación del registro de afiliación las personas denunciadas, lo cierto es que fue omiso en aportar **documentación alguna** que acreditara el consentimiento de éstas para formar parte del padrón de afiliados del denunciado, indicando que dicha documentación la *enviaría previo al momento del vencimiento del emplazamiento*.

3. Documental pública, consistente en el acta circunstanciada, instrumentada por la autoridad instructora, en la que se dio cuenta que el registro como militantes de las personas involucradas, había sido eliminado del portal de internet del Partido Revolucionario Institucional.

4. Documentales públicas, consistentes en las impresiones obtenidas en el Sistema de Afiliados que administra la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, con el objetivo de conocer el estatus que guardan las afiliaciones materia de denuncia, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de once de diciembre de dos mil veintitrés.

5. Documental Privada, consistente en el oficio PRI/REP-INE/440/2023, firmado por el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, quien dio respuesta al emplazamiento de ley; manifestaciones que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.

Asimismo, proporcionó los originales de los formatos de afiliación correspondientes **seis** personas, conforme a lo siguiente:



No.	Persona denunciante	Documentales aportadas
1	Alexia Fernanda Cortez Carrillo	- Formato único de afiliación y actualización al registro partidario - Copia simple de credencial para votar
2	Blanca Delia Ruiz Uriarte	- Formato único de afiliación o refrendo - Copia simple de credencial para votar
3	Alexander Iribe Soto	- Formato único de afiliación o refrendo - Copia simple de credencial para votar
4	Judith Esmeralda Ávila Herrera	- Formato único de afiliación o refrendo - Copia simple de credencial para votar
5	Luz María Rivera Laija	- Formato único de afiliación o refrendo - Copia simple de credencial para votar - Copia simple de credencial partidista
6	Enrique Alberto Alvarado Hernández	- Formato único de afiliación o refrendo - Copia simple de credencial para votar

Documentos, en los que, en cada uno de ellos, se aprecian la **firma manuscrita** de la persona que, bajo la apariencia del buen derecho, manifestó su deseo de afiliarse al partido político en cuestión.

CONCLUSIONES PRELIMINARES

De las constancias de autos, se advierte esencialmente, lo siguiente:

- ❖ En las fechas que a continuación se citan, las personas denunciantes fueron encontradas como militantes del Partido Revolucionario Institucional en el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, base de datos administrada por el Instituto Nacional Electoral y alimentada por los partidos políticos, por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de este Instituto que abajo se citan; lo anterior, en el marco del proceso de reclutamiento, selección y contratación de las figuras de Supervisor/a Electoral y Capacitador Asistente Electoral, para el proceso electoral federal y locales 2023-2024.

No.	Persona denunciante	Fecha de afiliación	Junta que realizó la búsqueda
1	Alexia Fernanda Cortez Carrillo	17/11/2020	35 en Estado de México
2	Blanca Delia Ruiz Uriarte	08/06/2019	03 en Sinaloa
3	Alexander Iribe Soto	13/05/2019	
4	Judith Esmeralda Ávila Herrera	04/06/2019	
5	Luz María Rivera Laija	20/03/2014	
6	Enrique Alberto Alvarado Hernández	23/11/2020	06 en Estado de México

- ❖ Derivado de ello, y dentro del plazo establecido por la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024, y su correspondiente Adenda, presentaron queja por una presunta indebida de afiliación, a través de los



cuales, a partir de su contenido, se hace patente su disconformidad con su detección como militante del citado partido político, a la vez que dicha manifestación, al tenor con lo previsto en mencionada Estrategia, le permitiría continuar con el proceso de selección de aspirantes a los cargos electorales tantas veces indicados.

- ❖ Que a partir de la investigación realizada por parte de la autoridad instructora, existen elementos para afirmar, de forma preliminar y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, que efectivamente, dichas personas se encontraron dentro de los registros válidos de militantes del Partido Revolucionario Institucional; lo anterior, a partir del reconocimiento que realiza el partido político sobre dicha militancia, así como la constancia (cédula de afiliación) que exhibe para demostrar sus afirmaciones.
- ❖ Que al existir indicios, que demuestran, en un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, que las personas denunciadas tienen una ascendencia con un instituto político, por presuntamente aparecer como sus militantes, su integración a las funciones electorales como supervisor electoral y/o capacitador asistente electoral, para el proceso electoral federal y locales 2023-2024, podría trasgredir los principios de imparcialidad e independencia, rectores de la función de los organismos electorales y sus integrantes, como lo son los cargos referidos líneas arriba.

TERCERO. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES

En primer lugar, los elementos que la autoridad administrativa electoral debe analizar para emitir su pronunciamiento, son los siguientes:

- a) Apariencia del buen derecho.** La probable existencia de un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso.
- b) Peligro en la demora.** El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama.
- c) La irreparabilidad de la afectación.**
- d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida.**

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida —que se busca evitar sea mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se



discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su actualización.

El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la doctrina denomina como el *fumus boni iuris* —apariencia del buen derecho—, unida al elemento del *periculum in mora* —temor fundado— de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final.

En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los que se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa conducta ha forzado la instauración del procedimiento.

El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el **segundo elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien promueve la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.**

Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una **evaluación preliminar** en torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, y así determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares.

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se requiere una **acción ejecutiva, inmediata y eficaz**, que debe adoptarse mediante la ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la materia electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los sujetos en conflicto.

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas, y en su caso, determinar cual procede adoptar, debe realizar diversas ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos



en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así como su razonabilidad y proporcionalidad.

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se refieran a **hechos objetivos y ciertos**; no así respecto de hechos que se hayan consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños irreparables.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento, no solo de otra resolución, sino también del interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro **MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.**⁴

Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el sumario, se desprenda la presunta conculcación a alguna disposición de carácter electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la materia de la queja.

CUARTO. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL

1. MARCO JURÍDICO

⁴ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, pág. 18.



NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y DE LOS ÓRGANOS PÚBLICOS ELECTORALES LOCALES, ASÍ COMO SUS ATRIBUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES

A fin de dar contexto al objeto, alcances y finalidad de la presente determinación, es necesario precisar la naturaleza jurídica de este Instituto y los organismos públicos electorales locales, en lo relativo a la organización y preparación de los procesos electorales, toda vez que estas entidades del Estado Mexicano, son quienes desde un rango constitucional y legal, la encomienda total de la preparación y organización de los procesos electorales en todas sus etapas, así como la designación de los funcionarios electorales encargados de las labores inherentes, antes, durante y posterior a la jornada de los procesos electorales de su competencia, dentro de los cuales, obviamente se encuentra la contratación, reclutamiento y capacitación de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales.

Bajo esta perspectiva, debe tenerse en cuenta que el artículo 1 de la Constitución Política Federal, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Enseguida, el artículo 5, párrafo cuarto, de la misma disposición suprema, prevé que las funciones electorales y censales tienen carácter obligatorio y gratuito. Por su parte, el diverso 35, fracción I de la propia carta Magna, señala que es derecho de la ciudadanía votar en las elecciones.

El artículo 36, fracción III de la noma en comento, refiere que son obligaciones de la ciudadanía mexicana, entre otras, votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley.

De conformidad con el artículo 41, párrafo tercero del citado cuerpo normativo, así como 29, 30 párrafos 2 y 31, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. El mismo precepto constitucional en su Base V, Apartado A, señala que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales y que el Instituto, es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya



integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y la ciudadanía, en los términos que ordene la ley.

En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, **independencia**, **imparcialidad**, máxima publicidad, objetividad, paridad y su realización con perspectiva de género, serán principios rectores.

Asimismo, dispone que las Mesas Directivas de Casilla, estarán integradas por la ciudadanía; el Instituto es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

En el párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1, 4 y 5 del artículo 41 Constitucional citado, en concatenación con el diverso 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I y IV de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen que **corresponde al Instituto, para los procesos electorales federales y locales, la capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la designación del funcionariado de sus Mesas Directivas de Casilla, así como las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de la observación electoral.**

El numeral 1, párrafos 1, 2 y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que sus disposiciones son de observancia general en el territorio nacional y para la ciudadanía que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero, aplicables a las elecciones en el ámbito federal y local respecto de las materias que establece la Constitución Federal, y que las Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Carta Magna y en la Ley General de la materia antes citada.

El artículo 4, párrafo 1 de la Ley General a que nos hemos venido refiriendo, establece que el Instituto y los organismos públicos electorales locales, en el ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar su cumplimiento. En el mismo tenor, el diverso numeral 8, párrafos 1 y 2 de ese cuerpo legal, determina que es obligación de la ciudadanía integrar las Mesas Directivas de Casilla y participar como observadores/as electorales de los actos de preparación y desarrollo de los procesos electorales federales y locales, así como de las demás formas de participación ciudadana.

El artículo 33, párrafo 1 de la misma ley, dispone que el Instituto ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional a través de 32 delegaciones, una en cada entidad federativa y 300 subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal. Por su parte, el diverso 35 determina que el Consejo General, en su calidad de órgano superior, es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones



constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y se realicen con perspectiva de género.

NATURALEZA JURÍDICA, ATRIBUCIONES E IMPORTANCIA DE LAS FUNCIONES DE LAS Y LOS SUPERVISORES ELECTORALES Y LAS Y LOS CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES, EN LOS PROCESOS ELECTORALES

El artículo 35, fracción VI de la Constitución Federal, prevé el **derecho de participación política** de ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley. En este sentido y en congruencia con lo dispuesto en el diverso 41, fracción V, de la propia Carta magna, el Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo quien, junto con las autoridades administrativas locales electorales, se encuentra a cargo de la función estatal de organizar las elecciones.

Para los procesos electorales federales y locales, al Instituto Nacional Electoral le corresponde, entre otras, la capacitación electoral; la geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales; el padrón y la lista de electores; la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas.

En el artículo 76 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se dispone que durante el proceso electoral, funcionarán consejos distritales, los cuales, en términos del diverso numeral 303, párrafo 1, entre otras cosas, designarán a un número suficiente de supervisores/as y capacitadores/as-asistentes electorales, quienes, en general, son las personas encargadas de las tareas relacionadas con la capacitación de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla; la ubicación, verificación y de la instalación y clausura de las casillas; traslado de paquetes; realización de cómputos, entre otras.

En el mismo artículo, párrafo 3, se señalan los requisitos que deberán cumplir quienes se interesen por fungir como supervisores/as y capacitadores/as-asistentes electorales, destacando, en lo que al presente acuerdo nos interesa, **no militar en ningún partido político, ni haber participado activamente en alguna campaña electoral.**

Ahora bien, a fin de poner en relieve la importancia de la función de las y los Supervisores Electorales y las y los Capacitadores Asistentes Electorales, debe precisarse que de conformidad con el artículo 303, párrafo 2 de la Ley General de



la materia, los supervisores/as y capacitadores/as-asistentes electorales auxiliarán a las juntas y consejos distritales en los trabajos de:

- a. Visita, notificación y capacitación de las y los ciudadanos para integrar las mesas directivas de casillas.
- b. Identificación de lugares para la ubicación de las mesas directivas de casillas.
- c. Recepción y distribución de la documentación y materiales electorales en los días previos a la elección.
- d. Verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla.
- e. Información sobre los incidentes ocurridos durante la jornada electoral.
- f. Traslado de los paquetes electorales apoyando a los funcionarios de mesa directiva de casilla.
- g. Realización de los cómputos distritales, sobre todo en casos de recuentos totales o parciales.
- h. Los que expresamente les confiera el consejo distrital, particularmente lo señalado en los párrafos 3 y 4 del artículo 299 de la LGIPE, relacionado con la recolección de la documentación de las casillas.

Sobre este particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-373/2018 Y ACUMULADOS,⁵ se refirió, en relación con las funciones que desempeñan los Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as Asistentes Electorales, de la forma siguiente:

67 Como se observa, las tareas que realizan las personas que fungen como supervisoras y capacitadoras-asistentes electorales inciden directamente en el desarrollo de los procesos electorales, en todas sus etapas: en la fase de preparación de la elección, el día de la jornada electoral y en los cómputos de los votos.

68 Así, toda vez que **por el desempeño de sus labores son susceptibles de afectar el resultado de los comicios, es de especial relevancia imponer mecanismos que garanticen que la ciudadanía que participa en dichos cargos observe los principios que deben regir a los procesos electorales**, destacadamente los de **imparcialidad e independencia**.

69 Estos principios constitucionales exigen estándares procedimentales y estructurales que garanticen el ejercicio de los derechos de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

70 Así, es claro que los supervisores/as y capacitadores/as deben satisfacer, en la medida posible, los estándares de independencia e imparcialidad, en tanto que sus funciones son presupuestos para el debido desarrollo de la elección, lo que involucra además el derecho de votar de la ciudadanía, y la autenticidad de los resultados.

⁵ Consultable en el siguiente portal electrónico <https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/Superior/SUP-RAP-0373-2018.pdf>



71 De esta manera, deben evitarse al máximo posible cualesquiera factores o circunstancias susceptibles de incidir en el cumplimiento o valoración de su función, como lo pudiese ser el vínculo partidista con alguno de los participantes en la contienda electoral.

72 Objetivamente, lo ordinario es que la militancia partidista implica la adhesión a ciertos ideales, convicciones y principios que están estrechamente ligados a una opción política. Entonces, la militancia es un factor objetivo que cobra relevancia al momento en que se valora la contratación de funcionarios/as, a fin de elegir de entre las y los aspirantes a quienes, en condiciones de igualdad, garanticen la mayor proximidad a la neutralidad, imparcialidad y al resto de los principios que rigen las elecciones.

73 Asimismo, se desincentiva que los institutos políticos generen estrategias para que sus actuales afiliados/as se incorporen en las filas de la autoridad electoral con propósitos malintencionados.

74 Atento a lo anterior, se considera que la garantía de los principios rectores, destacadamente, imparcialidad e independencia, así como la autenticidad de los resultados de las elecciones constituye un fin legítimo para establecer condiciones el ejercicio del derecho de integrar las autoridades electorales.

75 Asimismo, se considera que la medida es apta para alcanzar el fin apuntado, toda vez que la ausencia de una vinculación vigente y real o tangible de los funcionarios electorales con los partidos políticos permite razonablemente suponer, a primera vista, que la o el ciudadano interesado no responde a los intereses de la organización política en la cual milita y tiene una participación activa dado que en ese periodo se presume no hay una relación directa que pudiera poner en duda la imparcialidad o independencia que el ejercicio del cargo implica.

PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL (IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA)

Como ha quedado evidenciado, a lo largo del presente acuerdo, las disposiciones constitucionales y legales, así como los criterios emitidos por la máxima jurisdicción en esta materia, realizan un especial énfasis en la importancia que revisten las funciones de los Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as Asistentes Electorales, su intervención dentro de todas las etapas del proceso electoral y, consecuentemente, en la necesidad de que en su desempeño, se observen y garanticen todos y cada uno de los principios que rigen la función electoral.

Con este propósito, enseguida se enunciarán las definiciones que al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre cada uno de los principios que rigen la función electoral, los cuales se encuentran contenidos en la jurisprudencia P./J. 144/2005 de rubro "FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO,"⁶ cuyo texto es del tenor siguiente:

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.

La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán

⁶ Consultable en la siguiente liga electrónica <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/176707>



principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.

Acción de inconstitucionalidad 19/2005. Partido del Trabajo. 22 de agosto de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con el número 144/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de octubre de dos mil cinco.

2. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Como se indicó al inicio del presente acuerdo, en el marco del proceso de reclutamiento, selección y contratación de las figuras de Supervisor/a Electoral y Capacitador/a Asistente Electoral, para el proceso electoral federal y locales 2023-2024, las **seis** personas aspirantes a dicho cargo, fueron encontradas como militantes del Partido Revolucionario Institucional, lo anterior, como parte de la verificación de no militancia partidista (mínimo un año) que deben cumplir quienes pretendan acceder a estos encargos electorales, en términos de lo dispuesto en el artículo 303, párrafo 3, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la sentencia recaída en el recurso de apelación SUP-RAP-373/2018 Y ACUMULADOS, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Como consecuencia de ello, dio inicio al procedimiento ordinario sancionador citado al rubro, con el propósito de verificar si en efecto, como lo afirmaron las personas aspirantes, no existió el consentimiento previo para que fuese inscritas al padrón de militantes del Partido Revolucionario Institucional y en consecuencia, la utilización indebida de sus datos personales para tal fin; lo cual, a la postre, también le impediría acceder a ocupar los cargos electorales de supervisor/a electoral y/o capacitador/a asistente electoral en el proceso electoral en curso, al no cumplir con



los requisitos legales a que se refiere el párrafo 3, del artículo 303 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así las cosas, como parte de las investigaciones realizadas para conocer la veracidad de los hechos derivados de la presunta indebida afiliación realizada por las personas aspirantes, se ordenó, entre otras diligencias, requerir al partido político señalado como responsable para que informara si las personas de referencia son o en algún momento han sido militantes del citado instituto político y, en su caso, remitiera los originales de las cédulas de afiliación respectivas, o bien, aquellas constancias de las cuales se pudiese desprender la voluntad de las mismas de verdaderamente querer estar afiliadas a esa fuerza política.

Es el caso, que como se indicó en el apartado de medios de prueba de esta determinación, el Partido Revolucionario Institucional mediante oficio PRI/REP-INE/440/2023, indicó que las personas citadas a lo largo de la presente determinación sí eran sus militantes, mencionando la fecha de afiliación y exhibiendo al efecto el documento en el que soporta su dicho, en este caso, el formato de afiliación respectivo, de la que se advierte presuntamente una firma correspondiente a cada una de las personas aspirantes en cuestión.

A partir de lo anterior, en un análisis preliminar, bajo la apariencia del buen derecho, y sin prejuzgar sobre la autenticidad de los elementos de prueba aportados por el partido para sustentar sus afirmaciones, existe en autos al menos constancias que podrían hacer suponer que la afiliación detectada por las Juntas Distritales correspondientes, en el marco del proceso de reclutamiento y selección de aspirantes a ocupar los cargos de supervisor/a electoral y capacitador/a asistente electoral, pudiese ser auténtica y, por lo tanto, legal.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que, como se refirió en el apartado de marco normativo del presente acuerdo, esta autoridad electoral nacional, en el marco de sus atribuciones constitucional y legalmente conferidas, está obligada a observar y garantizar que se observen los principios que rigen la función en esta materia, como lo son los de *legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia*.

Sobre el particular, como ya se dijo, cobran relevancia los principios de imparcialidad, que *consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista*; y el de independencia, concebido por la máxima autoridad jurisdiccional de nuestro País, el cual implica *una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto*



apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.

A partir de las anteriores definiciones, en concatenación con las reflexiones vertidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el mencionado recurso de apelación SUP-RAP-373/2018 Y ACUMULADOS, a propósito de la importancia de las actividades y funciones que normativamente tiene encomendados las y los supervisores electorales y las y los capacitadores asistentes electorales en las distintas etapas de los procesos electorales constitucionales organizados por este Instituto, llevan a concluir en la necesidad de evitar que personas con una afiliación a cualquier partido o fuerza política, puedan o deban intervenir en la organización, preparación y conclusión de todas y cada una de las etapas del proceso electoral en curso.

En efecto, como se analizó párrafos arriba, al tenor con el citado artículo 303 de la Ley de la materia, las personas aspirantes que a la postre serán seleccionadas para ocupar los cargos de supervisores/as electorales y/o capacitadores/as asistentes electorales, realizarán las funciones siguientes: a. Visita, notificación y capacitación de las y los ciudadanos para integrar las mesas directivas de casillas; b, Identificación de lugares para la ubicación de las mesas directivas de casillas; c. Recepción y distribución de la documentación y materiales electorales en los días previos a la elección; d, verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla; e, información sobre los incidentes ocurridos durante la jornada electoral; f, traslado de los paquetes electorales apoyando a los funcionarios de mesa directiva de casilla; g, realización de los cómputos distritales, sobre todo en casos de recuentos totales o parciales y; finalmente, todos aquellos que expresamente les confiera el consejo distrital, particularmente lo señalado en los párrafos 3 y 4 del artículo 299 de la Ley General en estudio, relacionado con la recolección de la documentación de las casillas.

Como se desprende de las anteriores atribuciones, las y los aspirantes a estos cargos electorales, para su participación en el proceso electoral en curso, realizarán funciones por demás importantes, sobre todo para la capacitación e integración de las mesas directivas de casilla, las cuales serán ni más ni menos, que los entes que recibirán directamente de la ciudadanía, la votación recibida en los próximos comicios.

Además, como lo refirió la propia Sala Superior en la sentencia mencionada con antelación:



...las tareas que realizan las personas que fungen como supervisoras y capacitadoras-asistentes electorales **inciden directamente en el desarrollo de los procesos electorales, en todas sus etapas: en la fase de preparación de la elección, el día de la jornada electoral y en los cómputos de los votos.**

Así, toda vez que **por el desempeño de sus labores son susceptibles de afectar el resultado de los comicios, es de especial relevancia imponer mecanismos que garanticen que la ciudadanía que participa en dichos cargos observe los principios que deben regir a los procesos electorales, destacadamente los de imparcialidad e independencia.**

...

Así, es claro que los supervisores/as y capacitadores/as deben satisfacer, en la medida posible, los estándares de independencia e imparcialidad, en tanto que sus funciones son presupuestos para el debido desarrollo de la elección, lo que involucra además el derecho de votar de la ciudadanía, y la autenticidad de los resultados.

De esta manera, deben evitarse al máximo posible cualesquiera factores o circunstancias susceptibles de incidir en el cumplimiento o valoración de su función, como lo pudiese ser el vínculo partidista con alguno de los participantes en la contienda electoral.

Objetivamente, lo ordinario es que la militancia partidista implica la adhesión a ciertos ideales, convicciones y principios que están estrechamente ligados a una opción política. Entonces, la militancia es un factor objetivo que cobra relevancia al momento en que se valora la contratación de funcionarios/as, a fin de elegir de entre las y los aspirantes a quienes, en condiciones de igualdad, garanticen la mayor proximidad a la neutralidad, imparcialidad y al resto de los principios que rigen las elecciones.

...

Con base en las anteriores consideraciones y en estricto cumplimiento y observancia a los principios que rigen la función electoral, especialmente los de imparcialidad e independencia señalados parágrafos arriba, y tomando en consideración que a la fecha se está desarrollando el PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS Y LOS SUPERVISORES ELECTORALES Y CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES QUE FORMA PARTE DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2023-2024, se hace necesario que esta autoridad ponga particular cuidado en vigilar que en la selección de las y los funcionarios electorales a quienes se les contratará y, por consiguiente, se les encomendará el desarrollo de las actividades relacionadas con las próximas elecciones federal y locales concurrentes 2023-2024, gocen de plena imparcialidad e independencia en el ejercicio del encargo, lo cual, no se podría cumplir, si se permite que personas afines a fuerzas políticas e interés particulares, ideológicos, económicos o de cualquier otra índole, lleven la conducción de las labores que les son legamente conferidas.

En este sentido, y en relación al caso que nos ocupa, como ya se ha mencionado, a partir de las indagatorias realizadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, se cuenta con indicios que permiten considerar, que bajo la apariencia del buen derecho, y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, se podría estar frente a una afiliación que no fue producto de la comisión de alguna falta por parte del partido político señalado como responsable, sino a una inscripción como militante



previamente consentida, a partir de la información proporcionada y que obra en autos.

Con base en ello, tomando en consideración que la instrucción total y definitiva del presente asunto, podría demorar en un tiempo superior a la o las fechas en que deban llevarse a cabo la contratación de quienes fungirán con los cargos de supervisores/as y capacitadores/as electorales; derivado del desahogo y agotamiento de todas las etapas normativamente establecidas para los procedimientos ordinarios sancionadores, es necesario **DECRETAR PROCEDENTE EL DICTADO DE MEDIDAS CAUTELARES**, para los siguientes efectos:

- **Impedir** a las personas aspirantes a los cargos de supervisores/as electorales y capacitadores/as-asistentes electorales, **continuar con el procedimiento de reclutamiento y contratación respectivo**, hasta en tanto se resuelva en definitiva el procedimiento ordinario instruido.

Lo anterior, porque, de permitirlo, y resultar inexistente la infracción a cargo del instituto político, se violarían en perjuicio de la función electoral, los principios de imparcialidad e independencia, al haberse permitido que una persona con filias partidista intervenga directamente en la organización y conducción del proceso electoral; lo anterior, en los términos argumentados en este apartado.

Para los efectos antes precisados, hágase del conocimiento de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como a las juntas distritales y locales de este Instituto, de los distritos y entidades que se citan en la tabla inserta abajo, la presente determinación, para los efectos que en el ámbito de sus atribuciones correspondan, tendentes a cumplir con lo ordenado en la presente determinación.

No.	Junta Distrital Ejecutiva	Persona denunciante
1	35 en Estado de México	Alexia Fernanda Cortez Carrillo
2	03 en Sinaloa	Blanca Delia Ruiz Uriarte
3		Alexander Iribe Soto
4		Judith Esmeralda Ávila Herrera
5		Luz María Rivera Laija
6	06 en Estado de México	Enrique Alberto Alvarado Hernández

Los razonamientos expuestos **no prejuzgan** sobre la existencia de las infracciones denunciadas, lo que en todo caso será materia de la resolución que se ocupe del fondo de la cuestión planteada.



QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A efecto de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que en términos de lo dispuesto por el artículo 109, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, puede ser impugnado el presente Acuerdo mediante recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.

Consecuentemente, con fundamento en lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 459, párrafo 1, inciso b), y 471, párrafo 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 7, párrafo 1, fracción XVII, 38, 40, párrafo 3, y 43, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Es procedente la adopción de medidas cautelares en contra de **Alexia Fernanda Cortez Carrillo, Blanca Delia Ruiz Uriarte, Alexander Iribe Soto, Judith Esmeralda Ávila Herrera, Luz María Rivera Laija y Enrique Alberto Alvarado Hernández**, aspirantes al cargo de supervisor/a electoral y/o capacitador/a asistente electoral en los términos y por las razones establecidas en el considerando **CUARTO**, de la presente resolución.

SEGUNDO. Se impide a **Alexia Fernanda Cortez Carrillo, Blanca Delia Ruiz Uriarte, Alexander Iribe Soto, Judith Esmeralda Ávila Herrera, Luz María Rivera Laija y Enrique Alberto Alvarado Hernández**, personas aspirantes a los cargos de supervisores/as electorales y capacitadores/as-asistentes electorales, continuar con el procedimiento de reclutamiento y contratación respectivo, hasta en tanto se resuelva en definitiva el procedimiento ordinario instruido.

Lo anterior, porque, de permitirlo, y resultar inexistente la infracción a cargo del instituto político, se violarían en perjuicio de la función electoral, los principios de imparcialidad e independencia, al haberse permitido que una persona con filias partidista intervenga directamente en la organización y conducción del proceso electoral.

TERCERO. Hágase del conocimiento de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como a las juntas distritales y locales de este Instituto, de los distritos y entidades que se citan en la tabla inserta abajo la presente



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**ACUERDO ACQyD-INE-346/2023
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/Q/AFCC/JD35/MEX/98/2023**

determinación, para los efectos que en el ámbito de sus atribuciones correspondan, tendentes a cumplir con lo ordenado en la presente determinación.

No.	Junta Distrital Ejecutiva	Persona denunciante
1	35 en Estado de México	Alexia Fernanda Cortez Carrillo
2	03 en Sinaloa	Blanca Delia Ruiz Uriarte
3		Alexander Iribe Soto
4		Judith Esmeralda Ávila Herrera
5		Luz María Rivera Laija
6	06 en Estado de México	Enrique Alberto Alvarado Hernández

CUARTO. Se instruye al Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que de inmediato realice las acciones necesarias tendentes a notificar la presente determinación.

QUINTO. En términos del considerando **QUINTO**, la presente resolución es impugnable mediante el recurso de revisión respecto del procedimiento especial sancionador, atento a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El presente Acuerdo fue aprobado en la Sexagésima Sexta Sesión Extraordinaria de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, celebrada el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos de la Consejera Electoral Maestra Rita Bell López Vences, del Consejero Electoral Maestro Arturo Castillo Loza, y de la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez.

**CONSEJERA ELECTORAL Y PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

MAESTRA BEATRIZ CLAUDIA ZAVALA PÉREZ